Comercialización y privatización de la educación: necesidad de una respuesta mundial

Angelo Gavrielatos y Mireille de Koning

En octubre de 2013, la Internacional de la Educación[1] (IE) lanzó la campaña ***Unámonos por la educación pública*** (Unámonos), una iniciativa de movilización en torno a la educación pública. Durante un año de campaña, la IE y sus organizaciones afiliadas en todo el mundo reivindicaron la responsabilidad de los gobiernos de garantizar una educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos.

La campaña *Unámonos* pretendía ser el inicio de un movimiento global por una educación pública de calidad para todas y todos.

Urgencia de una respuesta global

En el transcurso de la campaña, se hizo evidente que la IE tenía que intensificar los esfuerzos dirigidos a detener y revertir el aumento de la comercialización y privatización de la educación. Así lo concretaba un análisis que destacaba el crecimiento de las empresas educativas (*edu-business)* cuyo tamaño, alcance e influencia no se habían previsto. El rápido crecimiento de las *edu-business* está impulsado por el deseo, por parte del capital mundial, de acceder al relativamente inexplorado mercado de la educación, valorado entre los 4,5 y 5 billones de dólares anuales. Habiendo identificado la naturaleza lucrativa del mercado educativo, las multinacionales de la educación se han propuesto ejercer su influencia y controlar la educación para satisfacer su afán de lucro.

Consciente de la dimensión de este fenómeno y la amenaza que representa para la calidad educativa, la IE decidió lanzar una respuesta mundial a la rápida expansión del sector privado con fines de lucro en la educación pública. Aunque sigue la línea de trabajo de la IE [2] y las campañas de sus afiliadas en torno a la privatización[3], la respuesta mundial pretende aunar esfuerzos a fin de lograr una respuesta mundial más firme y concreta, encauzando la energía e influencia colectiva de sus organizaciones afiliadas. La respuesta mundial de la IE a la comercialización y la privatización de la educación se centra en la participación de actores privados, entre ellos las empresas de educación, en varios aspectos de la gestión de la educación, en especial la venta y la prestación de servicios educativos, como las pruebas estandarizadas y las herramientas de evaluación y la elaboración de políticas y su aplicación. Concretamente, pretende luchar contra la expansión del ánimo de lucro en la educación pública cuando perjudica el derecho de las y los estudiantes a una educación gratuita y de

[1] La Internacional de la Educación es la federación sindical mundial que representa a más de treinta millones de docentes y trabajadores de la educación en todo el mundo. Tiene 398 organizaciones miembros en 173 países y territorios.

[2] Por ejemplo, a través de varios trabajos de investigación sobre la privatización de la educación, las alianzas público-privadas, las reformas educativas mundiales y los docentes y la economía política de la privatización (próximamente). Todos estos estudios están disponibles en http://ei-ie.org/en/websections/content_detail/3272

[3] Un ejemplo es la campaña del National Union of Teachers del Reino Unido acerca de las academias y las escuelas gratuitas para garantizar que se regulen las escuelas privadas y se apliquen las condiciones adecuadas para los docentes.

calidad; cuando crea y afianza desigualdades; socava las condiciones laborales y los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación; y merma la toma de decisiones democrática y la rendición de cuentas pública en relación con la gestión educativa.

También se dirige a los gobiernos, que en demasiados casos han permitido o incluso facilitado el crecimiento de la comercialización y privatización de la educación.

El rápido crecimiento de la tendencia mundial a la privatización y comercialización de la educación y las distintas formas en que se está sometiendo a los sistemas educativos a la obtención de beneficios y a una planificación dirigida por intereses privados y comerciales en lugar de intereses públicos[4], supone una amenaza particularmente peligrosa para el derecho universal a la educación.

Este planteamiento se basa en la idea de que el sector privado es más idóneo para proporcionar educación, que los sistemas educativos deberían emular a los mercados y que la educación es un bien privado. Esto supone un riesgo no solamente para los propios sistemas educativos públicos, sino también para su capacidad de promover la democracia, la cohesión social y la igualdad. Además, plantea interrogantes acerca de qué intereses se protegen con estos cambios en la educación y con qué resultados.

En muchos países, los gobiernos han delegado en otros su responsabilidad fundamental de asegurar el derecho a la educación mediante un sistema educativo público de calidad con plena rendición de cuentas. Cada vez más, se dirigen o se alían con el sector privado para ofrecer cobertura educativa. Al mismo tiempo, el diseño de políticas educativas que promueven la elección de escuela, la competitividad, la rendición de cuentas, así como las pruebas estandarizadas y los currículos es vendido cada vez más a los gobiernos por instituciones internacionales, multinacionales de la educación y fundaciones, entre otros actores privados[5].

Colombia no es inmune a este fenómeno. Como señala un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre las escuelas concertadas colombianas, «además de la presencia de instituciones completamente privadas, el sistema educativo de Colombia tiene una larga tradición de alianzas público-privadas».

Lo peligroso de que los gobiernos externalicen las actividades educativas a empresas con ánimo de lucro es que permite a estos actores «obtener beneficios sobre los que no existe control»[6] y además reafirmar su influencia en los procesos políticos y dirigir los programas educativos de formas que pueden no coincidir con los acuerdos internacionales y las

---

[4]Macpherson, I., Robertson, S. y G. Walford, "An Introduction to Privatisation, Education and Social Justice", en: Macpherson, I., Robertson, S. y G. Walford (Eds.) (2014) *Education, Privatisation and Social Justice: Case studies from Africa, South Asia and South East Asia*, Oxford: Symposium.

[5]Ball, S. (2012) *Global Education Inc.: New Policy Networks and the Neo-liberal Imaginary*, Londres, Routledge.

[6]Informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2014) "Privatización y derecho a la educación" disponible en línea en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/AnnualReports.aspx [Último acceso el 28 de octubre de 2014].

prioridades nacionales y pueden no beneficiar a estudiantes, docentes y a las sociedades en general. Además, las actividades de los actores privados con ánimo de lucro en el sector educativo pueden desviar recursos que podrían haber representado más profesorado y personal de apoyo educativo, instalaciones o programas para los estudiantes del sector público.

La IE mantiene que los estados deberían seguir siendo los principales responsables de que haya una educación pública de calidad y gratuita y de asegurar la protección de los derechos laborales de docentes y personal de apoyo educativo, así como unas condiciones laborales decentes. En este sentido, la IE aprueba el último informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación presentado a la Asamblea General de la ONU, que advierte del alarmante crecimiento de la educación privada no regulada y de la amenaza que supone para el derecho a la educación de calidad[7].

Escuelas privadas de bajo coste

Las nuevas formas de educación privada, en rápida expansión, son motivo de preocupación por su impacto en la equidad. Las escuelas privadas de bajo coste (LFPS, por sus siglas en inglés), dirigidas por pequeños o grandes empresarios, con o sin ánimo de lucro, están destinadas especialmente a grupos social y económicamente desfavorecidos y son supuestamente *asequibles*. Este modelo escolar se está vendiendo a las familias pobres con la promesa de que las escuelas nombrarán a docentes de calidad y proporcionarán unos resultados de aprendizaje superiores. En realidad, en los contextos donde están creciendo las LFPS, en el África subsahariana —en Ghana, Kenia, Nigeria y Uganda—, en el sur de Asia —en India y Pakistán— y en Latinoamérica —en Perú—, su calidad, asequibilidad y consecuencias para la equidad son muy controvertidas

Las escuelas privadas de bajo coste suelen contratar a docentes que no están cualificados, les pagan salarios muy bajos y les contratan por periodos cortos para reducir los costes de explotación. Algunas siguen el llamado modelo *school in box*, donde la enseñanza y el aprendizaje se están estandarizando y comercializando. Además, a pesar de que dicen dirigirse a hogares humildes, suelen ser inaccesibles para las familias más pobres, que no pueden permitirse pagar las tarifas (diarias)[8]. Por otra parte, «en muchos casos la privatización agrava la discriminación de género en la educación, en parte porque en muchos países los padres favorecen la educación de los niños sobre la de las niñas»[9]. Para empeorar las cosas, las escuelas de bajo coste pueden desviar financiación y ayudas públicas destinadas a las escuelas estatales, debilitando así el sistema público educativo, especialmente en contextos donde el gasto público en educación ya es bajo. Aun así, a pesar

[7]Informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2014) "Privatización y derecho a la educación" disponible en línea en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/AnnualReports.aspx [Último acceso el 28 de octubre de 2014].

[8]Härmä, J. (2010) "School choice for the poor? The limits of marketisation of primary education in rural India", Create Pathways to Access, Research Monograph No. 23, January 2010, disponible en línea en: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED508748.pdf [último acceso el 11 de julio de 2014]. V. también: Fennell, S. (2013) "Low-fee private schools in Pakistan: a blessing or a bane?" En: Srivastava, P. (ed.), *Low-fee Private Schooling: Aggravating Equity or Mitigating Disadvantage?* Oxford: Symposium Books.

[9]http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/07/140627-Right-to-Education-Submission-to-CEDAW-Final-with-logos.pdf

de estos hechos, la integración de las escuelas LFP en los marcos de alianzas público-privadas merece seria consideración por parte de gobiernos, organizaciones internacionales y donantes[10].

Recientemente, el Banco Mundial expresó su apoyo a la multinacional *Bridge International Academies*, una cadena de escuelas privadas con ánimo de lucro, que cobra una tarifa y está respaldada por Pearson, Facebook y otros. *Bridge Academies* comenzó en Kenia, ha llegado a Uganda y planea trasladarse a Nigeria, la India y otros países hasta alcanzar los 10 millones de niños matriculados en 2020. Emplean métodos docentes muy estandarizados, estrategias de marketing agresivas, contratan profesorado sin formación y se dirigen a familias muy humildes, aprovechándose de su deseo de una vida mejor, para venderles su *producto*.

La IE considera inaceptable lucrarse a costa de estas familias desfavorecidas. Cualquiera que persiga, promueva o acepte beneficiarse de la educación, especialmente cuando no existe la alternativa de una escuela pública *gratuita* de *calidad* debería ser identificado y rendir cuentas. Desviar dinero destinado a este fin representa una violación del derecho a la educación y una elusión de la obligación que tienen los estados de proporcionar una educación pública gratuita y de calidad para todas y todos. Esto requiere un renovado énfasis en las obligaciones del gobierno y establecer unos estándares mínimos para la regulación de la educación privada y sus proveedores[11]. Además, debe revelarse quiénes son estos actores y someterlos al escrutinio público y la rendición de cuentas.

Pruebas estandarizadas y evaluación

En todo el mundo, los programas educativos nacionales se centran cada vez más en los resultados de aprendizaje medibles y en la rendición de cuentas de docentes mediante pruebas, como principales indicadores de calidad. El Movimiento Global de Reforma Educativa (GERM, Global Education Reform Movement) hace referencia al aumento de la 'exportación' de políticas entre distintos sistemas educativos o la convergencia entre sistemas promovida generalmente por las organizaciones internacionales y otros actores.

La mayoría de estas reformas favorecen e impulsan una mayor competitividad, una elección de escuelas más amplia, la desprofesionalización docente y la rendición de cuentas mediante los resultados de pruebas estandarizadas[12]. Una mayor dependencia de las pruebas estandarizadas y de las herramientas de recogida de datos para medir los resultados de los sistemas educativos ha abierto las puertas para que las empresas con ánimo de lucro proporcionen dichos servicios en la educación. El hecho de que los mismos actores que desarrollan y administran estos programas e instrumentos sean también los

[10]Verger, A. y S. VanderKaaij (2012) "The National Politics of Global Policies: Public Private Partnerships in Indian Education" en: Verger, A., Novelli, M. y H. Kosar Altinyelken (2012) *Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues and Policies* London: Bloomsbury; ver también: Barakat, S., Hardman, F., Rohwerder, B. and Rzeszut, K. (2014) *The evidence for the sustainable scale-up of low-cost private schools in South West Asia.* Londres: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institutei of Education, University of London.

[11]Por ejemplo, como se establece en *Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos* de las Naciones Unidas.

[12]Sahlberg, P. (2011) "The Fourth Way of Finland" *Journal of Educational Change* Vol. 12, Issue. 2, pp: 173-185.

principales defensores de que haya una mayor recogida a gran escala de datos y pruebas estandarizadas[13] es especialmente preocupante y plantea serias preguntas acerca del «conflicto de intereses».

El modelo GERM no concuerda con los intereses de la sociedad por distintas razones. En primer lugar, cuanto más se estandarizan los currículos y la evaluación y cuanto más se externaliza su diseño y su ejecución, más beneficios consiguen las empresas. Docentes (y familias) quieren que las escuelas logren el equilibrio correcto entre la evaluación y la enseñanza, pero los modelos de prueba estandarizada que desarrollan y gestionan las empresas con ánimo de lucro inclinan la balanza hacia una atención desproporcionada a dichas pruebas. En segundo lugar, estas pruebas pueden distorsionar la instrucción y obligar al docente a «enseñar para el examen», perjudicando por tanto su capacidad de hacer juicios válidos sobre los logros de sus estudiantes. Pueden limitar la creatividad en la enseñanza, reduciendo los currículos para centrarse solamente en ciertas materias a costa de las demás asignaturas, y minando la autonomía y experiencia profesional docentes[14].

En tercer lugar, docentes, personal de apoyo educativo y familias entienden que el éxito de los y las estudiantes no puede medirse exclusivamente a través de pruebas estandarizadas y evaluaciones y que un sistema con una verdadera rendición de cuentas tiene que reflejar una definición más amplia del aprendizaje. Se deberían utilizar evaluaciones formativas, no punitivas, para diagnosticar las fortalezas y debilidades de estudiantes y orientar la enseñanza. Si las pruebas estandarizadas dictan el rendimiento de los sistemas educativos, docentes, personal de apoyo educativo, familias y miembros de la comunidad ya no son expertos en cómo evolucionan sus comunidades escolares.

En su lugar, un sistema de rendición de cuentas basado en el rendimiento satisface los intereses de los que desarrollan y proporcionan las herramientas de medición, elevando y convirtiendo sus productos en la medida de la calidad de la educación.

Además, al *vender* políticas e ideas de reforma, las empresas pueden a su vez vincularlas con sus pruebas, currículos y productos de evaluación. Las prioridades de las empresas de educación son obtener beneficios, intereses que en última instancia entran en conflicto con las prioridades y necesidades de financiación de los sistemas educativos.

Los argumentos a favor de una respuesta mundial a la comercialización y la privatización están claros y además son urgentes. La IE reconoce que para lograr los objetivos de una educación de calidad para todas y todos hace falta una movilización global coordinada como parte de la respuesta global.

---

[13]Draxler, A. (Julio 2014) "Metrics on Policies and Learning Outcomes for Post-2015: Some words of Caution" NorragNewsbite, disponible en línea en: http://norrag.wordpress.com/2014/07/11/metrics-on-policies-and-learning-outcomes-for-post-2015-some-words-of-caution/ [último acceso el 11 de julio de 2014].

[14]Ball, S. y D. Youdell (2008) *Hidden Privatisation in Public Education.* Bruselas, Internacional de la Educación.

Sabemos que no podemos hacerlo solos. El panorama político mundial nos exige que iniciemos un nuevo análisis estratégico más profundo sobre qué se debe hacer para combatir pero, sobre todo, para revertir las actuales tendencias. Debemos aumentar la unidad sindical y, por consiguiente, la fortaleza. También debemos comunicarnos y crear alianzas con la comunidad como nunca lo hemos hecho antes. Tenemos que fortalecer nuestras alianzas con las familias y con la comunidad en general. No hay alianza más natural que la que puede y debe existir entre familias y docentes. Al fin y al cabo, después de los padres, los docentes son los más interesados en el bienestar de sus estudiantes.

Pero tenemos que profundizar más todavía. Tenemos que crear alianzas más estrechas con todo el movimiento sindical, ya que todos los trabajadores y trabajadoras perciben las consecuencias negativas del deseo por parte del capital mundial de redefinir y reducir los estándares y las condiciones laborales. Y, por supuesto, si queremos que sea un cambio duradero, tenemos que crear alianzas con otros movimientos sociales con los mismos objetivos generales que tenemos.